

Antes de entrar a analizar el texto sometido a informe es preciso señalar que, habida cuenta de la fundamentación legal del informe que inmediatamente va a evacuarse y su carácter preceptivo, a tenor de lo dispuesto en las normas que acaban de señalar, debería indicarse en la Exposición de Motivos de la norma que la misma ha sido sometida al previo informe de la Agencia Española de Protección de Datos.

El proyecto de real decreto tiene por objeto desarrollar reglamentariamente el marco general del banco de pruebas regulatorio concebido como un entorno controlado para llevar a cabo ensayos que permitan el desarrollo de proyectos piloto con el fin de facilitar la investigación y la innovación en el ámbito del sector eléctrico, en virtud de lo previsto en la disposición adicional vigésima tercera de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.

De este modo, el proyecto se fundamenta en la habilitación normativa contenida en la disposición adicional vigésima tercera, Bancos de pruebas regulatorios, de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, introducida por el apartado once del artículo 4 del Real Decreto Ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica, y modificada posteriormente por la disposición final segunda ocho del Real Decreto Ley 29/2021, de 21 de diciembre, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito energético para el fomento de la movilidad eléctrica, el autoconsumo y el despliegue de energías renovables, cuya redacción actual es la siguiente:

Disposición adicional vigésima tercera. Bancos de pruebas regulatorios.

1. Al amparo de la presente ley y con el objeto de cumplir los objetivos previstos en la misma, así como los objetivos de energía y clima y la sostenibilidad ambiental, se podrán establecer bancos de pruebas regulatorios en los que se realicen pruebas que permitan el desarrollo de proyectos piloto con el fin de facilitar la investigación e innovación en el ámbito del sector eléctrico.

A tal efecto, mediante real decreto del Gobierno se desarrollará reglamentariamente el marco general del banco de pruebas regulatorio para la participación de proyectos piloto. Dicho real decreto concretará el marco que fije las particularidades de tal participación y, en su caso, podrá definir determinadas exenciones de las regulaciones del sector eléctrico, sin perjuicio del principio de sostenibilidad económica y financiera del sistema eléctrico. Las pruebas deberán tener carácter limitado en cuanto a su volumen, tiempo de realización y ámbito geográfico. Una vez aprobado el marco general, se celebrarán las convocatorias específicas mediante orden de la Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, previo informe de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.

2. En el marco del banco de pruebas regulatorio, el promotor, actuará a su riesgo y ventura y como único y exclusivo responsable, responderá por los daños que se produzcan durante la realización de las pruebas o como consecuencia de las mismas, en los supuestos siguientes:

a) por incumplimiento de los términos y condiciones que se establezcan para realizar las pruebas, y que serán fijados en la forma que determine el real decreto;

b) por causa de riesgos no informados por él mediando culpa o negligencia de su parte;

c) por fallos técnicos o humanos durante el desarrollo de las pruebas que fueran de su responsabilidad.

El real decreto establecerá el sistema de garantías para cubrir la responsabilidad del promotor por los daños y perjuicios.

El real decreto establecerá el régimen de responsabilidades e indemnizaciones por las pérdidas patrimoniales y demás daños que pudieran sufrir los participantes, derivados de su participación en los proyectos piloto, siempre que estos daños o pérdidas sean consecuencia de la actuación del promotor. Se contemplará igualmente el régimen de responsabilidad por incumplimientos de los participantes en los proyectos.

Las autoridades que de conformidad con el real decreto intervengan en las pruebas no serán responsables de los posibles daños y perjuicios que pudieran originarse durante la realización de las mismas. En los términos y condiciones para la realización de las pruebas, establecidos en la forma que estipule el real decreto, no se podrá prever en ningún caso que la Administración resarza al promotor

de las pérdidas patrimoniales resultantes de su participación en el banco de pruebas regulatorio.

Tal y como se señala en la Exposición de motivos, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) confirma el compromiso de España con la transición ecológica y la consecución de los objetivos del PNIEC 2021- 2030, que ha supuesto una sólida base para el diseño de los componentes y las reformas e inversiones relacionadas con la transición ecológica del Plan. La figura de los bancos de pruebas regulatorios es esencial para garantizar el cumplimiento de los objetivos del PRTR, así como para habilitar las reformas e inversiones previstas en el componente 8.

De este modo, con la presente norma se daría cumplimiento al hito 124, “entrada en vigor de medidas para promover los bancos de pruebas regulatorios para fomentar la investigación y la innovación en el sector eléctrico”, asociado a la reforma 4 del componente 8 (C8.R4), de acuerdo con lo establecido en el Anexo de la Decisión de Ejecución del Consejo (CID) relativa a la aprobación de la evaluación del plan de recuperación y resiliencia de España, de 6 de julio de 2021, así como en la Decisión de la Comisión aprobatoria de los Acuerdos Operativos entre la Comisión y España en virtud del Reglamento (UE) 2021/241 (OA), de noviembre de 2021. De conformidad con lo anterior, a más tardar el 30 de junio de 2022, debe haberse producido la publicación en el Boletín Oficial del Estado y la entrada en vigor del real decreto para el desarrollo de los *sandboxes* regulatorios que permita el desarrollo de nuevos proyectos piloto, con el objetivo de fomentar la investigación y la innovación en el sector eléctrico, razón por la cual se solicita la emisión del presente informe a la mayor brevedad posible.

I

Tal y como se define en el artículo 2.2. del proyecto, el «Banco de pruebas regulatorio o banco» es un entorno experimental en el que pueden realizarse pruebas o ensayos dentro del marco de ejecución de proyectos piloto, de manera segura y controlada, con el fin de facilitar la investigación y la innovación en el ámbito del sector eléctrico, siendo una de sus características identificativa la «Exención regulatoria», que el apartado 4 del citado artículo define como el permiso temporal para eximir del cumplimiento parcial de una norma, incluyendo la posibilidad de actuar en ausencia de una regulación específica, dentro del ámbito del sector eléctrico. Asimismo, otro de sus elementos fundamentales es el «Protocolo de pruebas» que el apartado 7 define como el documento suscrito por el promotor y la Secretaría de Estado de Energía que comprende los términos y condiciones concretas para el proyecto piloto correspondiente y las pruebas que se realicen en el ámbito del mismo, de conformidad con el artículo 10.

En primer lugar, la normativa aplicable en materia de protección de datos personales es el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del

Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos, RGPD), plenamente aplicable desde el 25 de mayo de 2018 y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

De acuerdo con el artículo 2.1 del RGPD, el mismo se aplica al tratamiento total o parcialmente automatizado de datos personales, así como al tratamiento no automatizado de datos personales contenidos o destinados a ser incluidos en un fichero.

El citado Reglamento extiende su protección, tal y como establece su artículo 1.2, a los derechos y libertades fundamentales de las personas físicas y, en particular, su derecho a la protección de los datos personales, definidos en su artículo 4.1 como “toda información sobre una persona física identificada o identificable («el interesado»); se considerará persona física identificable toda persona cuya identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, en particular mediante un identificador, como por ejemplo un nombre, un número de identificación, datos de localización, un identificador en línea o uno o varios elementos propios de la identidad física, fisiológica, genética, psíquica, económica, cultural o social de dicha persona.”

Quedan, en consecuencia, excluidas de su protección las personas jurídicas, pero su ámbito protector se extiende a las personas físicas que las representan, cuyos datos personales deben ser tratados con sujeción a lo previsto en dicho Reglamento.

La protección conferida por el Reglamento (UE) 2016/679 comprende también a los empresarios individuales, a diferencia de la normativa anterior, en la que el artículo 2.3 del Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, aprobado por Real decreto 1720/2017, de 21 de diciembre, excluía de su ámbito de aplicación los datos de los empresarios individuales, cuando el tratamiento de los datos a ellos referentes lo fuera en su calidad de comerciantes, industriales o navieros. El Reglamento (UE) 2016/679 no establece ninguna exclusión en este sentido, de modo que el tratamiento de los datos personales relativos a los empresarios individuales debe someterse a las previsiones contenidas en esta norma.

Partiendo de dicha regulación, y tal y como indicó esta Agencia en el Informe 171/2018 referido al Anteproyecto de Ley para la transformación digital del sistema financiero, primera regulación en nuestro país de un espacio regulado de pruebas, el *sandbox financiero*, siendo una de las características propias de estos espacios regulados de pruebas la posibilidad de exceptuar la aplicación de la legislación sectorial específica aplicable y no siendo factible exceptuar la aplicación del RGPD al tratarse de normativa comunitaria

directamente aplicable, debe reflejarse esta circunstancia con toda claridad en el texto normativo.

Asimismo, en relación con la base jurídica del tratamiento de los datos personales de los participantes en los ensayos que se realicen en el banco de pruebas, basada en su libre voluntad de participar en el mismo, en el citado Informe 171/2018 se destaca que dicha base jurídica sería la prevista en el artículo 6.1.a) del RGPD: “el interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales para uno o varios fines”, y que dicho consentimiento debería cumplir con todos los requisitos previstos en el RGPD, por lo que el consentimiento que se preste a efectos del tratamiento de datos de carácter personal es independiente del consentimiento prestado para participar en el ensayo y deberá diferenciarse de los demás asuntos que figuren en el acuerdo de adscripción regulado en el artículo 11 del proyecto. Asimismo, debería facilitarse la correspondiente información en materia de datos de carácter personal que deberá ajustarse en todo caso a lo dispuesto en los artículos 13 y 14 del RGPD, pudiendo facilitarse *por capas* en los términos señalados en el artículo 11 de la LOPDGDD.

Del mismo modo, en cuanto a la revocación del consentimiento derivada del ejercicio del derecho de desistimiento contemplado en el artículo 16 del proyecto, deberá ser tan fácil como lo fue darlo y no afectará a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada, debiendo constar igualmente en el documento por el que se desista de la participación en la prueba.

Por otro lado, atendiendo a la finalidad del tratamiento, no parece previsible que vayan a ser objeto de tratamiento alguna de las categorías especiales de datos personales a las que se refiere el artículo 9 del RGPD. No obstante, el supuesto de que se pretendiera tratar alguno de ellos, el mismo sería lícito sobre la base del consentimiento previsto en el artículo 9.2.a) del RGPD: “el interesado dio su consentimiento explícito para el tratamiento de dichos datos personales con uno o más de los fines especificados, excepto cuando el Derecho de la Unión o de los Estados miembros establezca que la prohibición mencionada en el apartado 1 no puede ser levantada por el interesado”, debiendo recordarse que conforme al artículo 9.1 de la Ley Orgánica 3/2018, “el solo consentimiento del afectado no bastará para levantar la prohibición del tratamiento de datos cuya finalidad principal sea identificar si ideología, afiliación sindical, religión, orientación sexual, creencias u origen racial o étnico”.

En cuanto al tratamiento de los datos personales por parte de las autoridades supervisoras en el ejercicio de las competencias que les son propias (Secretaría de Estado de Energía Y Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia), se encontraría fundamentado en la normativa legal que les atribuye sus competencias de supervisión e inspección y en los términos que en la misma se establezca. Por lo que en estos casos encuentra

su fundamento en lo previsto en el artículo 6.1 letra e) del RGPD: el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento.

II

Por último, el citado Informe 171/2018 destacaba la necesidad de que en los protocolos que se firmen habrá que definirse con precisión quién ostentará la condición de responsable del tratamiento o de posibles corresponsables, así como, en su caso, de encargados del tratamiento.

El artículo 4 del RGPD define al responsable del tratamiento como “la persona física o jurídica, autoridad pública, servicio u otro organismo que, solo o junto con otros, determine los fines y medios del tratamiento”, regulando en su artículo 26 el supuesto de la corresponsabilidad, en cuyo caso “los corresponsables determinarán de modo transparente y de mutuo acuerdo sus responsabilidades respectivas en el cumplimiento de las obligaciones impuestas por el presente Reglamento...”.

En cuanto al encargado, el artículo 4 lo define como “la persona física o jurídica, autoridad pública, servicio u otro organismo que trate datos personales por cuenta del responsable del tratamiento”, regulando en el artículo 28.3 el contenido obligatorio del contrato o del acto jurídico en el que se formalice el encargo.

Atendiendo a dichas definiciones, y teniendo en cuenta que lo esencial para la consideración como responsable no deriva del tratamiento en sí de los datos sino de determinar los fines y medios del tratamiento, dicha condición la ostentará el promotor del proyecto tal y como lo define el artículo 3.d del anteproyecto: “cualquier persona física o jurídica que, individual o conjuntamente con otras, solicite la iniciación de un proyecto piloto conforme a lo previsto en esta ley, incluidas empresas tecnológicas, entidades financieras, asociaciones representativas de intereses, centros públicos o privados de investigación y cualquier otro interesado”. En los casos en que se constituya una agrupación, conforme al artículo 5 del proyecto, si se tratase desde la perspectiva de la protección de datos personales de un supuesto de corresponsabilidad en el tratamiento, deberá determinarse claramente las responsabilidades respectivas en los términos previstos en el artículo 26 del RGPD ya citado.

La correcta identificación del responsable del tratamiento tiene una especial incidencia desde la perspectiva de la normativa de protección de datos personales, teniendo en cuenta las consecuencias que derivan del nuevo enfoque dado por el RGPD, basado en el principio de responsabilidad proactiva.

Tal y como viene señalando esta Agencia y así lo indica la Exposición de motivos de la LOPDGDD “la mayor novedad que presenta el Reglamento (UE) 2016/679 es la evolución de un modelo basado, fundamentalmente, en el control del cumplimiento a otro que descansa en el principio de responsabilidad activa, lo que exige una previa valoración por el responsable o por el encargado del tratamiento del riesgo que pudiera generar el tratamiento de los datos de carácter personal para, a partir de dicha valoración, adoptar las medidas que procedan”.

Por consiguiente, es el responsable del tratamiento el que debe cumplir con los principios que se recogen en el artículo 5 del RGPD, entre los que se encuentra, según lo visto, el de responsabilidad proactiva, recogido en su apartado 2, “el responsable del tratamiento será responsable del cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 1 y capaz de demostrarlo («responsabilidad proactiva»)”.

Un papel fundamental dentro de este nuevo modelo de responsabilidad activa establecido en el Reglamento general de Protección de Datos lo desempeñará el delegado de protección de datos, que el Reglamento General regula en sus artículos 37 a 39.

A su vez, el artículo 38.1 establece claramente que “El responsable y el encargado del tratamiento garantizarán que el delegado de protección de datos participe de forma adecuada y en tiempo oportuno en todas las cuestiones relativas a la protección de datos personales” y el artículo 39.2 dispone que “El delegado de protección de datos desempeñará sus funciones prestando la debida atención a los riesgos asociados a las operaciones de tratamiento, teniendo en cuenta la naturaleza, el alcance, el contexto y fines del tratamiento”.

Finalmente, el artículo 39.1 enumera las funciones del delegado de protección de datos, entre las que se encuentran “informar y asesorar al responsable o al encargado del tratamiento y a los empleados que se ocupen del tratamiento de las obligaciones que les incumben en virtud del presente Reglamento y de otras disposiciones de protección de datos de la Unión o de los Estados miembros” (apartado a), “supervisar el cumplimiento de lo dispuesto en el presente Reglamento, de otras disposiciones de protección de datos de la Unión o de los Estados miembros y de las políticas del responsable o del encargado del tratamiento en materia de protección de datos personales, incluida la asignación de responsabilidades, la concienciación y formación del personal que participa en las operaciones de tratamiento, y las auditorías correspondientes” (apartado b) y “ofrecer el asesoramiento que se le solicite acerca de la evaluación de impacto relativa a la protección de datos y supervisar su aplicación de conformidad con el artículo 35 (apartado c).

Asimismo le corresponde al delegado de protección de datos “actuar como punto de contacto de la autoridad de control para cuestiones relativas al tratamiento, incluida la consulta previa a que se refiere el artículo 36, y realizar consultas, en su caso, sobre cualquier otro asunto” (apartado e).

Por consiguiente, es el responsable del tratamiento, asesorado, en su caso, por su DPD, quien debe cumplir con los requisitos establecidos en el RGPD, utilizando, para ello, los instrumentos que el propio reglamento recoge para cumplir con dicho principio de responsabilidad proactiva, documentándolo adecuadamente, a fin de poder demostrar dicho cumplimiento a la autoridad de control.

De este modo, el principio de responsabilidad proactiva hace recaer en el responsable todas las obligaciones de cumplimiento de la normativa de protección de datos personales, desde el diseño y por defecto, limitando la actuación de asesoramiento de las autoridades de control al supuesto de consulta previa del artículo 36 del RGPD, solo en los casos en que una evaluación de impacto relativa a la protección de los datos muestre que el tratamiento sigue implicando un alto riesgo pese a las medidas que el responsable pueda prever para mitigarlo, sin perjuicio del ejercicio de sus poderes de investigación y correctivos, conforme al artículo 58 del RGPD.

Consecuentemente, siendo una de las condiciones de elegibilidad de los proyectos piloto para el acceso a los bancos de pruebas regulatoria, conforme al artículo 6.1. del proyecto de real decreto, que su “estado de planificación y potencial desarrollo se encuentre lo suficientemente avanzado para participar en el mismo”, y de acuerdo con el principio de protección de datos “desde el diseño” recogido en el artículo 25 del RGPD, el responsable debe haber cumplido con sus obligaciones de responsabilidad proactiva contando con los correspondientes documentos en los que se reflejen los instrumentos regulados por el RGPD, previamente a la presentación del proyecto.

Por ello, para la admisión del proyecto, con el objeto de acreditar el cumplimiento de la normativa sobre protección de datos de carácter personal, deberá acreditarse por el responsable que ha cumplido con el citado principio de responsabilidad proactiva y que tiene debidamente documentadas todas las actuaciones exigidas por el RGPD:

- Análisis de la adecuación de las bases jurídicas del tratamiento con indicación detallada de los preceptos en que pretende sustentarse el interés público esencial, así como la fundamentación sobre si son proporcionales al objetivo perseguido y si respetan en lo esencial el derecho a la protección de datos personales al establecer medidas adecuadas y específicas para proteger los intereses y derechos fundamentales del interesado.

- Registro de actividades del tratamiento incluidas en el proyecto.
- Análisis de riesgos para los derechos y libertades de las personas físicas.
- Evaluación de impacto relativa a la protección de datos o justificación de la improcedencia de realizar la misma por no entrañar el tratamiento un alto riesgo para los derechos y libertades de las personas físicas.
- El informe del Delegado de protección de datos en relación con el cumplimiento de la normativa sobre protección de datos personales del proyecto presentado.
- Cualquier otra documentación relacionada con la protección de datos personales que el promotor considere necesaria para cumplir con el principio de responsabilidad proactiva.

Y en el caso de ser admitido y durante la fase de pruebas, deberá ir adaptando dichos documentos para la adecuada gestión continua del riesgo que al promotor le corresponde, en función de los avances y los cambios que en el nivel del riesgo se puedan producir durante la misma.

La forma en la que se acreditará el cumplimiento de dichas obligaciones deberá reflejarse en el correspondiente protocolo, entendiendo esta Agencia que una forma adecuada sería mediante la aportación de la declaración responsable prevista en el artículo 69.1. de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:

1. A los efectos de esta Ley, se entenderá por declaración responsable el documento suscrito por un interesado en el que éste manifiesta, bajo su responsabilidad, que cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente para obtener el reconocimiento de un derecho o facultad o para su ejercicio, que dispone de la documentación que así lo acredita, que la pondrá a disposición de la Administración cuando le sea requerida, y que se compromete a mantener el cumplimiento de las anteriores obligaciones durante el período de tiempo inherente a dicho reconocimiento o ejercicio.

Los requisitos a los que se refiere el párrafo anterior deberán estar recogidos de manera expresa, clara y precisa en la correspondiente declaración responsable. Las Administraciones podrán

requerir en cualquier momento que se aporte la documentación que acredite el cumplimiento de los mencionados requisitos y el interesado deberá aportarla.

III

Los criterios anteriores han sido debidamente tenidos en cuenta en el proyecto remitido.

De este modo, la necesaria observancia de la normativa europea se recoge, con carácter general, en el apartado 3 del artículo 4, al regular el *Régimen jurídico de aplicación*:

3. En todo caso, será de aplicación la legislación europea no pudiendo, en ningún caso, aplicarse exenciones regulatorias contrarias al mercado interior. En particular, serán de aplicación el Reglamento (UE) 2019/943 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de junio de 2019, relativo al mercado interior de la electricidad, y la Directiva (UE) 2019/944 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de junio de 2019, sobre normas comunes

Particularmente, la aplicación de la normativa sobre protección de datos personales se recoge específicamente en el artículo 10.5. al regular el *Protocolo de pruebas*:

5. Los datos personales se tratarán conforme a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (RGPD) y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

La documentación acreditativa del cumplimiento de las obligaciones en esta materia quedará a disposición de la Agencia Española de Protección de Datos.

Asimismo, el texto contiene referencias específicas para el adecuado cumplimiento de dicha normativa respecto del tratamiento de los datos personales de los participantes en los ensayos. De este modo, el artículo 11.1. en su letra e) se refiere al cumplimiento del deber de información, al prever que el acuerdo de adscripción concretará como mínimo:

e) La forma en la que se tratarán los datos personales del participante durante la realización de la prueba y sus derechos en materia de

protección de datos de carácter personal de conformidad con lo previsto en la legislación vigente.

Igualmente, el apartado 4 del artículo 5 se refiere al consentimiento de los participantes como base jurídica del tratamiento de sus datos personales:

4. Los participantes deberán prestar su consentimiento para el tratamiento de sus datos de carácter personal en el acuerdo de adscripción, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (RGPD) y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

Y en el artículo 16, al regular el derecho de desistimiento de los participantes se establece expresamente en su artículo 3 que “La retirada del consentimiento para el tratamiento de datos de carácter personal no afectará a la licitud del tratamiento basada en el consentimiento previo a su retirada”.

Por consiguiente, la única observación que se formula es la relativa a la acreditación del cumplimiento de la normativa de protección de datos personales a los solos efectos del desarrollo de las pruebas del proyecto piloto en el banco de pruebas conforme al principio de responsabilidad proactiva, que deberá establecerse en el correspondiente protocolo y que, como se ha señalado, podría consistir en una declaración responsable suscrita por el promotor.

Todo ello sin perjuicio de que la documentación que debidamente acredite el cumplimiento de dicho principio conforme al RGPD deba estar en poder del responsable y a disposición de esta Agencia.

Por ello, se propone la siguiente redacción del apartado 5 del artículo 10, referente al Protocolo de pruebas:

5. Los datos personales se tratarán conforme a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (RGPD) y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

En el protocolo de pruebas se especificará la forma en la que podrá acreditarse el cumplimiento de dicha normativa a los efectos del desarrollo de las pruebas.

En todo caso, la documentación acreditativa del cumplimiento de las obligaciones en esta materia **conforme al RGPD deberá estar en poder del responsable y** a disposición de la Agencia Española de Protección de Datos.